

125-19.61

**INFORME FINAL
DENUNCIA CIUDADANA DC-54-2023**

**MUNICIPIO DE CANDELARIA
MUNICIPIO DE DAGUA
MUNICIPIO DE EL ÁGUILA
MUNICIPIO DE FLORIDA**

**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
Santiago de Cali, noviembre de 2023**

HOJA DE PRESENTACIÓN

Contralora Departamental del Valle del Cauca

Ligia Stella Cháves Ortíz

Director Operativo de Participación Ciudadana

Pedro Pablo Paraless Pérez

Municipio de Candelaria – Valle

Municipio de Dagua – Valle

Municipio de El Águila - Valle

Municipio de Florida – Valle

Jorge Eliecer Ramírez Mosquera

Ana María Sanclemente

Yulian Daniel Gallego

Alexander Orozco Hurtado

Equipo Auditor

Daniela Blandón Prado

Tabla de contenido

INTRODUCCION.....	4
1 ALCANCE DE LA VISITA	4
2 LABORES REALIZADAS	4
3 RESULTADO DE LA VISITA.....	5
4 CONCLUSIONES	12
5 ANEXOS.....	13
5.1 Cuadro Resumen de OBSERVACIONES	13

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, manual de funciones de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a emitir informe respecto de la denuncia con radicación interna SADE 1737 del 17 de julio de 2023 DC-54-2023, en la cual se informa:

“Prescripción presuntamente irregular de obligaciones fiscales relacionadas con sobretasas ambientales y bomberil en los municipios de Candelaria, Dagua, El Águila y Florida” (Hallazgo 3).”

1 ALCANCE DE LA VISITA

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana recibió denuncia ciudadana, identificada con consecutivo interno SADE 1737 del 17 de julio de 2023 DC-54-2023.

Es importante recalcar que, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se pronunciará sobre los temas relacionados con el alcance y competencia del Control Fiscal lo cual está delimitado por la Constitución y Leyes que regulan la materia. Por lo anterior, no nos pronunciaremos sobre los hechos generados por situaciones personales o particulares que no tengan que ver con la ejecución de los recursos públicos.

2 LABORES REALIZADAS

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, como líder del proceso, efectuó el análisis a la denuncia ciudadana, radicada bajo la partida DC-54-2023 y a los anexos allegados con la misma, con el fin de analizar cada hecho denunciado, haciendo énfasis en el cumplimiento de la función que le corresponde a la Contraloría Departamental del Valle y a los resultados que de ella se derivan, en procura del bienestar de la comunidad.

Para la atención de la denuncia ciudadana, se recaudó la evidencia documental ante los siguientes Municipios

1. Municipio de Candelaria – Valle
2. Municipio de Dagua – Valle
3. Municipio de El Águila - Valle
4. Municipio de Florida - Valle

Seguidamente, se solicitó la siguiente información:

1. Certificar si desde la vigencia 2018 hasta la vigencia 2022, se prescribieron las obligaciones fiscales relacionadas con sobretasas ambientales, bomberiles y/o (cualquier denominación de sobretasa), impuesto predial.
2. En caso de haber prescrito dichas obligaciones fiscales enunciadas en el punto 1, por favor relacionar en matriz enviada por la CDVC.
3. Copia de todos los actos administrativos por medio de los cuales se hayan prescrito las obligaciones relacionadas en el punto 2.
4. Relacionar en matriz enviada por la CDVC, las obligaciones fiscales prescritas o con descuentos otorgados desde la vigencia 2018 hasta la vigencia 2022, afines a sobretasas ambientales, bomberiles y/o (cualquier denominación de sobretasa), impuesto predial.

3 RESULTADO DE LA VISITA

Una vez solicitada la documentación necesaria para confrontar los hechos denunciados con presuntas irregularidades de índole fiscal, se realizó visita fiscal a cada municipio, tomando una muestra de los procesos de cobro coactivos aperturados a los contribuyentes por concepto de mora ante el pago del Impuesto Predial Unificado. Revisando 10 procesos por cada municipio, para un total de 40 procesos.

En consecuencia, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, procede a analizar lo siguiente:

1. Municipio de Candelaria– Valle

En el Municipio de Candelaria – Valle del Cauca, al 2022, no prescribió obligaciones fiscales relacionadas con obligaciones fiscales derivadas del Impuesto Predial Unificado.

No obstante, dentro de las vigencias 2018 a 2022, se aperturaron 12.040 procesos de cobro coactivo, de los cuales se recuperó el pago de 727 procesos que ascienden a un valor de \$1.896.444.303.

Dentro de la muestra seleccionada, se analizaron diez (10) procesos de cobro coactivo aperturados desde la vigencia 2018 hasta el 2022, evidenciándose las siguientes actuaciones:

	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
1	003-2022	Medida cautelar	25/09/2023
2	009-2022	Solicitud de copia de ficha catastral	26/09/2023
3	013-2022	Solicitud de copia de ficha catastral	26/09/2023
4	016-2022	Auto de archivo por pago total de la obligación	21/09/2023
5	018-2022	Auto de archivo por pago total de la obligación	22/09/2023
6	023-2022	Solicitud de copia de ficha catastral	26/09/2023
7	044-2022	Medida cautelar	22/09/2023
8	053-2022	Medida cautelar	22/09/2023
9	084-2022	Medida cautelar	22/09/2023
10	092-2022	Auto de archivo por pago total de la obligación	21/09/2023

Conforme al análisis de la documentación recaudada, no se observan presuntas irregularidades de índole fiscal o disciplinario derivadas de la muestra seleccionada.

2. Municipio de Dagua– Valle

En el Municipio de Dagua – Valle del Cauca, al 2022, no prescribió obligaciones fiscales relacionadas con obligaciones fiscales derivadas del Impuesto Predial Unificado.

Seguidamente, se observó que dentro de las vigencias 2018 a 2022, se aperturaron 7.760 procesos de cobro coactivo, de los cuales se tomó una muestra de diez (10) procesos verificando lo siguiente:

	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Vigencia de última actuación
1	38	Medida cautelar	2.023
2	349	Medida cautelar	2.023
3	444	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.023
4	1146	Medida cautelar	2.023
5	1201	Resolución por medio de la cual se ordena seguir con la ejecución	2.023

	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Vigencia de última actuación
6	1247	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.023
7	4209	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.023
8	4951	Medida cautelar	2.023
9	5878	Resolución por medio de la cual se ordena seguir con la ejecución	2.023
10	5952	Medida cautelar	2.023

Conforme al análisis de la documentación recaudada, no se observan presuntas irregularidades de índole fiscal o disciplinario derivadas de la muestra seleccionada.

3. Municipio de El Águila– Valle

En el Municipio de El Águila – Valle del Cauca, al 2022, no prescribió obligaciones fiscales relacionadas con obligaciones fiscales derivadas del Impuesto Predial Unificado.

Seguidamente, se observó que dentro de las vigencias 2018 a 2022, se aperturaron 1.010 procesos de cobro coactivo, de los cuales se recuperó un valor de \$366.640.083 pesos M/Cte.

Dentro de la muestra seleccionada, se analizaron diez (10) procesos de cobro coactivo aperturados desde la vigencia 2018 hasta el 2022, sin embargo, los procesos 015, 040, 059 y 077, se archivaron por el pago total de las obligaciones, tal y como lo certificó el municipio de Argelia.

Por otro lado, las actuaciones de los procesos 2022-002; 2022-005; 2022-049; 2022-063; 2022-071 y 2022-100 se encuentran hasta el mandamiento de pago de cada deudor, no obstante, sin evidenciar medidas preventivas de embargo y secuestro de los bienes del deudor de manera previa o simultánea con el mandamiento de pago.

Los procesos revisados fueron los siguientes:

1. 2022-002
2. 2022-005
3. 2022-013
4. 2022-038
5. 2022-049
6. 2022-057
7. 2022-063

- 8. 2022-071
- 9. 2022-075
- 10. 2022-100

En consecuencia, se observan algunas deficiencias sobre los procesos 2022-002; 2022-005; 2022-049; 2022-063; 2022-071 y 2022-100, relacionados en la muestra solicitada por éste Ente de Control, por lo que se establece la siguiente observación:

- Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Condición:

La administración municipal a diciembre 31 de 2022, tenía aperturados 1.010 procesos de cobro coactivo. Las vigencias sobre las cuales se reportaban deudas con el impuesto predial unificado correspondían al 2020 y años anteriores.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, eligió una muestra de 10 procesos de cobro coactivo, de los cuales las actuaciones de los procesos 2022-002; 2022-005; 2022-049; 2022-063; 2022-071 y 2022-100, se encuentran hasta el mandamiento de pago, proferido el 14 de septiembre de 2022, situación que permite identificar una presunta inactividad procesal de dos años, por lo que no se observa impulso continuo a los procesos de cobro coactivo para la recuperación de los recursos en mora de pago por los contribuyentes.

Fuente y criterio:

Literales A y E del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 1 de la Ley 1066 de 2006, artículo 209 de la constitución Política de Colombia, artículo 317 del Código General del Proceso

Causa:

Presunta inoperancia en los actos que generan impulsos procesales dentro de los cobros coactivos generados por el municipio.

Presunta ausencia de mecanismos de seguimiento y control dentro de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo.

Efecto:

Lo que conlleva a un posible desistimiento tácito, así como un riesgo de caducidad de la acción de cobro, lo que conduce a un posible riesgo de detrimento patrimonial frente a las obligaciones fiscales relacionadas con los procesos de cobro coactivos.

Generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, lo que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento.

Por lo anterior, se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019.

4. Municipio de Florida– Valle

En el Municipio de Florida – Valle del Cauca, al 2020, prescribió las vigencias 2005 al 2012, las obligaciones fiscales relacionadas con la acción de cobro del impuesto predial unificado, en razón al texto original del artículo 817 del Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario, el cual determinaba la prescripción de la acción de cobro a partir de la culminación de los cinco (05) años de que la obligación se hiciera exigible al contribuyente (hasta la vigencia 2001). Posteriormente, su articulado fue modificado, determinando la prescripción del cobro a partir de que venciera el término para el pago de la obligación (desde el 2002 hasta el 2015).

Así las cosas, los actos administrativos por medio de los cuales se prescribieron las obligaciones fiscales derivadas del impuesto predial unificado desde las vigencias 1987 a 2015, se realizaron conforme a la normatividad vigente.

Ahora bien, la acción fiscal, que se pudiere haber generado por la omisión de cobro del Impuesto Predial Unificado – IPU, de las vigencias prescritas, caducó transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, por lo tanto, no es posible establecer presuntas incidencias de tipo fiscal sobre el hecho mencionado.

Seguidamente, dentro de las vigencias 2018 a 2022, se aperturaron 14.555 procesos de cobro coactivo, de los cuales se tomó una muestra de diez (10) procesos, evidenciándose lo siguiente:

No.	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
1	SH 2016-0038	Medida cautelar	2.022
2	2016-0247	Medidas previas	2.017
3	2016-0245	Medidas previas	2.017
4	2016-0250	Medidas previas	2.017
5	SHM.IP 2022-4324	Mandamiento de pago	septiembre de 2022

No.	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
6	SHM.IP 2022-11312	Mandamiento de pago	mayo de 2023
7	SHM.IP 2022-2540	Mandamiento de pago	septiembre de 2022
8	2016-0208	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
9	12708	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
10	2016-0007	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022

Evidenciadas algunas deficiencias sobre los procesos relacionados en la muestra tomada por éste Ente de Control, se establece la siguiente observación:

- Hallazgo Administrativo con Incidencia Disciplinaria

Condición:

La administración municipal a diciembre 31 de 2022, tenía aperturados 14.555 procesos de cobro coactivo. Las vigencias sobre las cuales se reportaban deudas con el impuesto predial unificado correspondían al 2020 y años anteriores.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, eligió una muestra de los siguientes procesos de cobro coactivo:

No.	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
1	SH 2016-0038	Medida cautelar	2.022
2	2016-0247	Medidas previas	2.017
3	2016-0245	Medidas previas	2.017
4	2016-0250	Medidas previas	2.017
5	SHM.IP 2022-4324	Mandamiento de pago	septiembre de 2022
6	SHM.IP 2022-11312	Mandamiento de pago	mayo de 2023
7	SHM.IP 2022-2540	Mandamiento de pago	septiembre de 2022

No.	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
8	2016-0208	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
9	12708	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
10	2016-0007	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022

Dentro de los procesos escogidos en la muestra, en los numerales 1-7 actuaciones cuyo tiempo sobrepasa un año, situación que permite identificar una presunta inactividad procesal de dos años, por lo que no se observa impulso continuo a los procesos de cobro coactivo para la recuperación de los recursos en mora de pago por los contribuyentes.

Fuente y criterio:

Literales A y E del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 1 de la Ley 1066 de 2006, artículo 209 de la constitución Política de Colombia, artículo 317 del Código General del Proceso

Causa:

Presunta inoperancia en los actos que generan impulsos procesales dentro de los cobros coactivos generados por el municipio.

Presunta ausencia de mecanismos de seguimiento y control dentro de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo.

Efecto:

Lo que conlleva a un posible desistimiento tácito, así como un riesgo de caducidad de la acción de cobro, lo que conduce a un posible riesgo de detrimento patrimonial frente a las obligaciones fiscales relacionadas con los procesos de cobro coactivos.

Generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, lo que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento.

Por lo anterior, se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019.

4 CONCLUSIONES

1. El impuesto predial unificado es un gravamen dirigido a la propiedad, sobre el cual se recauda el valor correspondiente a un porcentaje del avalúo del bien inmueble y éste ingresa a las arcas estatales, dado el poder tributario territorial, con una misma finalidad: Adquirir ingresos para la sostenibilidad de los municipios, permitiendo el desarrollo de las políticas públicas adecuadas conforme a la necesidad de cada ente territorial. Derivando de esto la importancia del recaudo del Impuesto referido.
2. Conforme a la revisión de la muestra de cada proceso coactivo analizado, se establecieron observaciones para los municipios de El Águila y Florida, derivadas de la presunta falta de impulso procesal que genera riesgo en la recuperación de los recursos del impuesto predial unificado.
3. Mediante la sentencia 11001-03-06-000-2018-00207-00, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, procedió a resolver el conflicto negativo de competencias entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y el municipio de Honda – Secretaría de Hacienda y del Tesoro, dada la presunta “falta de competencia para decidir de fondo la solicitud de la prescripción de la acción de cobro por concepto de sobretasa ambiental”, por lo que determinó que:

“[L]a administración del impuesto predial comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y demás aspectos relacionados con el cumplimiento de esa obligación tributaria como un todo, lo cual incluye el porcentaje ambiental de ese tributo. (...) El Título VII del Estatuto Tributario Nacional (ET) regula la extinción de la obligación tributaria, y dentro de tal título se encuentra el artículo 817, que establece la prescripción como una de las formas de extinguir tales obligaciones. (...) Dado que las competencias de administración del impuesto predial están radicadas en el municipio, corresponde al alcalde municipal, como primera autoridad, o una dependencia de la alcaldía, o a la autoridad que este haya delegado, la decisión sobre la prescripción de la acción de cobro.(...) De esta forma, no cabe duda que la solicitud de prescripción de la acción de cobro sobre el porcentaje o sobretasa ambiental como parte de un todo llamado impuesto predial, es competencia de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Honda, dependencia del sector central de la administración municipal de Honda (...)

De esta forma, no cabe duda que la solicitud de prescripción de la acción de cobro sobre el porcentaje o sobretasa ambiental como parte de un todo llamado impuesto predial, es competencia de la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Honda, dependencia del sector central de la administración municipal de Honda.

En consideración a lo anterior, la Sala declarará que la Secretaría de Hacienda y del Tesoro del Municipio de Honda es competente para decidir la solicitud de prescripción de la acción de cobro de la “sobretasa ambiental” correspondiente a las vigencias fiscales del impuesto predial 2007 a 2010 (...)

Así las cosas, la prescripción del impuesto predial unificado es viable dada la normatividad vigente que rige la materia, sin embargo, es importante resaltar que la inoperancia de las herramientas de cobro actuales referentes a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, generan un daño patrimonial al estado, derivado de una gestión fiscal ineficiente.

4. En el caso puntual del municipio de Florida, se evidencia que la acción fiscal, que se pudiere haber generado por la omisión de cobro del Impuesto Predial Unificado – IPU, de las vigencias prescritas, caducó transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, es decir, la última vigencia que se prescribió correspondía al 2.012, razón por la cual, el hecho generador del detrimento patrimonial se dio cinco años después, el 2.017, por lo que cinco años después de ese hecho, esto es, en la vigencia 2.022, caducó la acción fiscal, por lo tanto, no es posible establecer presuntas incidencias de tipo fiscal sobre dicho hecho.
5. La competencia de las contralorías territoriales está delimitada por la Constitución y Leyes que regulan la materia, indicando que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos por el artículo 267 de la Constitución Política Colombiana y los artículos 4-5 del Decreto Ley 403 2020, y el control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, y su coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

Razón por la cual, ésta Contraloría Departamental no es competente para establecer alertas o presuntos hallazgos fiscales derivados de la gestión de los procesos de cobro coactivo adelantados por los sujetos de control.

5 ANEXOS.

5.1 CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

Cuadro No. 1. resumen de hallazgos:

Municipios del Valle del Cauca						
No.	Municipio	Hallazgo	A	D	F	Detrimento
1	El Águila	1	X	X		\$ 0
2	Florida	1	X	X		\$ 0

Elaboro Equipo Auditor

Convenciones:

- A. Administrativo
- D. Disciplinario
- F. Fiscal

ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN

1. Municipio de El Águila

- Observación Administrativa con Incidencia Disciplinaria

Condición:

La administración municipal a diciembre 31 de 2022, tenía aperturados 1.010 procesos de cobro coactivo. Las vigencias sobre las cuales se reportaban deudas con el impuesto predial unificado correspondían al 2020 y años anteriores.

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, eligió una muestra de 10 procesos de cobro coactivo, de los cuales las actuaciones de los procesos 2022-002; 2022-005; 2022-049; 2022-063; 2022-071 y 2022-100, se encuentran hasta el mandamiento de pago, proferido el 14 de septiembre de 2022, situación que permite identificar una presunta inactividad procesal de dos años, por lo que no se observa impulso continuo a los procesos de cobro coactivo para la recuperación de los recursos en mora de pago por los contribuyentes.

Fuente y criterio:

Literales A y E del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 1 de la Ley 1066 de 2006, artículo 209 de la constitución Política de Colombia, artículo 317 del Código General del Proceso

Causa:

Presunta inoperancia en los actos que generan impulsos procesales dentro de los cobros coactivos generados por el municipio. Presunta ausencia de mecanismos de seguimiento y control dentro de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo.

Efecto:

Lo que conlleva a un posible desistimiento tácito, así como un riesgo de caducidad de la acción de cobro, lo que conduce a un posible riesgo de detrimento patrimonial frente a las obligaciones fiscales relacionadas con los procesos de cobro coactivos. Generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, lo que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento.

Por lo anterior, se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019.

1.1. CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL

YULIÁN DANIEL GALLEGO GARCÍA, obrando en mi condición de Alcalde del Municipio de El Águila, Valle del Cauca, encontrándome dentro del término por usted otorgado, me permito dar respuesta al informe detallado en el asunto, de la siguiente manera a saber: En el informe en mención con respecto al Municipio de El Águila, se señala que de los diez (10) procesos solicitados, se encontró que cuatro (4) fueron archivados por pago total de las obligaciones, y los seis (6) restantes cuentan con mandamientos de pago, más no con la evidencia de medidas preventivas de embargo y secuestro de los bienes de los deudores. Frente a estos últimos procesos mencionados debo de señalar que por parte de este Despacho se dieron las instrucciones pertinentes a la Secretaría Financiera y Gestión Administrativa, para que realizara las actuaciones pertinentes a fin de obtener un impulso a cada uno de los expedientes, dentro de las que se encuentran las notificaciones de los mandamientos de pago, el proferimiento de actos administrativos que conduzcan a la materialización de embargos y secuestros de propiedades de los deudores, para poder continuar con el adelantamiento de la ejecución, las liquidaciones del crédito y costas, y el posterior remate en caso de ser necesario, todo encaminado a la recuperación de los recursos en mora de pago por los contribuyentes. Es mi deber agregar que desde las fechas que contienen los mandamientos de pago a la presente, se ha llevado a cabo un trabajo de concientización directa y personal con los contribuyentes morosos a efectos de lograr persuadirlos para que realicen los pagos de las sumas adeudadas al municipio, quienes en repetidas oportunidades han manifestado su imposibilidad económica inmediata para poder cancelar lo adeudado, argumentando problemas de liquidez antes diversos y variados aspectos que los han aquejado a cada uno de ellos, al punto de manifestar la necesidad de llevar a remate sus propiedades lo que conllevaría la pérdida de su patrimonio en caso de así procederse, aspectos que han sido escuchados con paciencia pero que igualmente han conllevado a informarles la imposibilidad en la perpetuación de la espera y en invitarlos a que adopten una actitud de compromiso con las necesidades que recae sobre el municipio y que deben de ser satisfechas con recursos propios como los que permite su recaudo a través del pago del impuesto predial.

Corolario de lo anterior debo manifestar que si bien hasta la presente se pudo haber evidenciado algún vestigio de inactividad dentro de los procesos de cobro coactivo auscultados, el mismo desapareció ya que estamos en condición de demostrar que al día de hoy los mismos expedientes revisados evidencian un impulso orientado a recuperar los recursos que hasta el momento los contribuyentes no han cancelado.

1.2. RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL

Si bien es cierto, el sujeto de control manifiesta el cierre de cuatro (04) procesos, derivados del pago total de las obligaciones de los contribuyentes y seis (06) procesos activos con actuaciones de las cuales se informa una directriz por parte de la administración municipal, no es posible evidenciar dichas novedades dentro de cada proceso y/o fechas diferentes a las que fueron observadas dentro del recaudo de

documentación solicitada por éste Ente de Control, ya que no fueron aportadas las actuaciones enunciadas, razón por la cual, queda en firme la observación establecida para el Municipio de El Águila.

2. Municipio de Florida

- Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria

Condición:

La administración municipal a diciembre 31 de 2022, tenía aperturados 14.555 procesos de cobro coactivo. Las vigencias sobre las cuales se reportaban deudas con el impuesto predial unificado correspondían al 2020 y años anteriores. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, eligió una muestra de los siguientes procesos de cobro coactivo:

No.	No. proceso de cobro coactivo	Última actuación	Fecha de última actuación
1	SH 2016-0038	Medida cautelar	2.022
2	2016-0247	Medidas previas	2.017
3	2016-0245	Medidas previas	2.017
4	2016-0250	Medidas previas	2.017
5	SHM.IP 2022-4324	Mandamiento de pago	septiembre de 2022
6	SHM.IP 2022-11312	Mandamiento de pago	mayo de 2023
7	SHM.IP 2022-2540	Mandamiento de pago	septiembre de 2022
8	2016-0208	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
9	12708	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022
10	2016-0007	Auto de archivo por pago total de la obligación	2.022

Dentro de los procesos escogidos en la muestra, en los numerales 1-7 actuaciones cuyo tiempo sobrepasa un año, situación que permite identificar una presunta inactividad procesal de dos años, por lo que no se observa impulso continuo a los procesos de cobro coactivo para la recuperación de los recursos en mora de pago por los contribuyentes.

Fuente y criterio:

Literales A y E del artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 1 de la Ley 1066 de 2006, artículo 209 de la constitución Política de Colombia, artículo 317 del Código General del Proceso

Causa:

Presunta inoperancia en los actos que generan impulsos procesales dentro de los cobros coactivos generados por el municipio. Presunta ausencia de mecanismos de seguimiento y control dentro de las actuaciones de los procesos de cobro coactivo.

Efecto:

Lo que conlleva a un posible desistimiento tácito, así como un riesgo de caducidad de la acción de cobro, lo que conduce a un posible riesgo de detrimento patrimonial frente a las obligaciones fiscales relacionadas con los procesos de cobro coactivos. Generando incertidumbre frente a la situación financiera de municipio, lo que puede afectar la toma de decisiones, y el cumplimiento de los proyectos financiados con recursos propios y el pago de los gastos de funcionamiento.

Por lo anterior, se configura una presunta falta disciplinaria de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019.

CONTRADICCIÓN DEL SUJETO DE CONTROL

Se acepta la observación en la parte administrativa y estamos dispuestos a suscribir las acciones de mejora que corresponda. Toda vez que se ha efectuado la revisión jurídica y tributaria correspondiente nos permitimos a ruego solicitar que el hallazgo sea suprimido en la parte disciplinaria toda vez que la entidad viene adelantando procesos de cobro coactivo acorde a la información que reposa en los archivos de la entidad desde vigencias fiscales anteriores. No obstante, en cuanto a la observación administrativa, estamos en la disposición de asumir las acciones de mejora a que haya lugar. Por todo lo anterior aceptamos la observación en el componente administrativo y solicitamos a ruego se suprima la parte disciplinaria. Como fundamentos jurídicos y facultades de la actuación de la Administración Municipal de Florida – Valle del Cauca, referente a los procesos de cobro administrativo y jurisdicción coactiva, tenemos el Acuerdo Municipal No.626 de 2020 que compila las normas nacionales, el Decreto Ley 624 de 1989, Ley 1437 de 2011 y otras que; han otorgado a la Administración Municipal de facultades y ha dado el proceso que se debe garantizar en las diferentes jurisdicciones.

RESPUESTA AL DERECHO DE CONTRADICCIÓN

Si bien es cierto, el sujeto de control acepta la incidencia administrativa de la observación planteada, no es posible evidenciar justificación y en consecuencia contradicción a la situación encontrada con incidencia disciplinaria, dada la falta de evidencias que soporten

la ausencia de las faltas que se le acusa, razón por la cual, queda en firme la observación establecida para el Municipio de Florida.

4. ANEXOS.

4.1 Cuadro Resumen de HALLAZGOS

Cuadro No. 3. resumen de Hallazgos:

	DC-54-2023							
Hallazgo	titulo	A	D	P	S	BC	F	detrimento
Municipio de Florida		1	1					
Municipio de El Águila		1	1					
		TOTAL						

Elaboro Equipo Auditor

Convenciones:

- A. Administrativo
- D. Disciplinario
- P. Penal
- S. Sancionatorio
- BC: Beneficio de Control Fiscal
- F. Fiscal